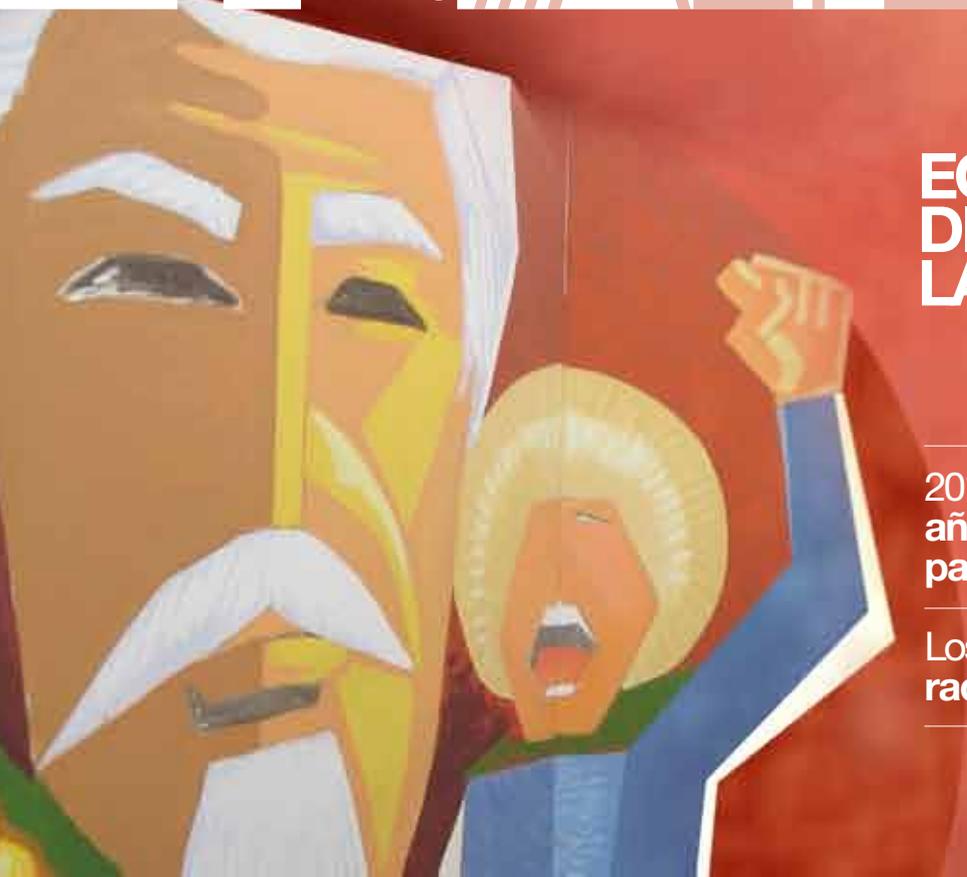


Febrero 2012

CO RRIEN TE ALTERNNA



ECUADOR: DILEMAS EN LAS IZQUIERDAS

2012:
año decisivo
para el proceso de cambio

Los desafíos del poder:
radicalidad y pragmatismo

ÍNDICE

4-6

Coyuntura//

Imperativo ético frente al 2013:
**más poder político para profundizar
el cambio democrático**

Hernán Reyes Aguinaga

7

Ecuador: **Dilemas en las izquierdas**

8-10

Tema Central//

Radicalidad o pragmatismo:
¿dilema de los gobiernos de izquierda?

Juan Pablo Muñoz

11-12

Tema Central//

Las izquierdas bajo la lupa

Juan J. Paz y Miño Cepeda

13-18

Tema Central//

Neoliberalismo, estado y cambio político

Franklin Ramírez Gallegos

19-25

Tema Central//

¿Cómo caminamos al Socialismo del Buen Vivir?

Cinco años de Revolución Ciudadana
desde el Plan Nacional del Buen Vivir

Pabel Muñoz

26-27

Tema Central//

Organizaciones Sociales:
Actores del cambio más allá del gobierno

Vanessa Bolaños

28-30

Local//

Descentralización:
la Revolución también se sostiene en lo local

Fernanda Maldonado

31-32

Local//

Desde los barrios de Quito:
**Construyendo actores sociales
para el cambio en la ciudad y el país**

Luis Esparza

33-34

Internacional//

Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños
**¿Eclipse en el atardecer neoliberal
o nuevo amanecer para la integración regional?**

Manuel Cerezal

CO
RRIEN
TE//ALterna

Créditos

Consejo Editorial:

Hernán Reyes

Juan Pablo Muñoz

María Fernanda Maldonado

Pabel Muñoz

Susanna Segovia

Vanessa Bolaños

Editora:

Susanna Segovia

Diseño e Impresión:

Kreathink/ Comunicación Visual

MA. Dle. Dg. Jorge Valverde

Fotografía:

Archivo Terranueva

Susanna Segovia

Stock.XCHNG Vi



Desde los barrios de Quito

Construyendo actores sociales para el cambio en la ciudad y en el país

31

América Latina y Ecuador están en un proceso fuerte de urbanización, reflejado en el crecimiento acelerado de las ciudades, que no necesariamente se ha correspondido con procesos de planificación urbana, dotación de servicios o generación de condiciones para el desarrollo de la vida de la gente. Esta situación ha provocado la agudización de ciertos problemas intrínsecos a las ciudades, como el desempleo, la deficiente dotación de servicios básicos, la inseguridad o la irregularidad en la propiedad del suelo y de las viviendas. Ante esta situación crítica, es cada vez más necesario exigir el cumplimiento del derecho a la ciudad y al hábitat para todos los ciudadanos y ciudadanas quiteños, a través de un modelo de política pública que garantice para todos y todas el acceso equitativo, justo, democrático y sostenible a los recursos, riquezas, servicios, bienes y oportunidades que la ciudad debe ofrecer a sus habitantes.

En ese sentido, los mecanismos de profundización de la democracia y de construcción de un nuevo modelo de ciudad requieren de actores sociales capaces de mirar el futuro más allá de sus inmensas necesidades inmediatas; que puedan estructurar sus demandas; elaborar sus propuestas y exigir su cumplimiento; vigilar y controlar a las autoridades locales en el cumplimiento de su deber. Y especialmente es necesario que las organizaciones sociales de la ciudad sean capaces de establecer alianzas y articulaciones con otros actores sociales, ciudadanos y políticos con quienes se sientan identificados, con el objetivo común de tejer un presente y futuro de buen vivir en la ciudad y en el país. Pero sobretodo, también es vital que este trabajo de articulación y construcción se realice desde la autonomía organizativa y política, rompiendo con las históricas prácticas clientelares y populistas tan arraigadas en nuestra ciudad y país. Este escenario exige extender la deliberación política desde el gobierno local hacia la organización social y la sociedad en su conjunto, poner efectivamente en marcha los innumerables mecanismos de democracia participativa que plantea la Constitución y emprender la construcción democrática de una articulación organizativa urbano popular. Sólo el protagonismo real de un sujeto social colectivo operando como una fuerza organizada y autónoma podrá dar efectivo sustento político a un nuevo modelo de desarrollo para Quito y el país, así como contener la segura contra-ofensiva de las élites económicas y los sectores clientelares que no ven con buenos ojos el proceso de cambio emprendido.

Esta construcción de un nuevo sujeto social en Quito no sólo es viable, sino que es urgente e impostergable, desde la convicción que los procesos de cambio se realizan no sólo desde la institucionalidad pública y/o desde la hegemonía electoral, sino desde procesos protagonizados por actores sociales con capacidad crítica, reflexiva y propositiva, que logren identificar las debilidades del proyecto político a la vez que se mantienen profundamente comprometidos con el proceso de cambio social y político que está viviendo Quito. Por eso el reto principal al que se enfrentan muchas organizaciones sociales es como mantener la autonomía y criticidad manteniendo su compromiso con el actual proyecto de cambio.

Sin embargo, es necesario también reconocer las dificultades que ha tenido el movimiento social en general, no solo el urbano, en posicionarse frente a este nuevo contexto nacional. La mayoría de las trayectorias organizativas más fuertes en nuestro país se han construido desde la resistencia al modelo neoliberal y ahora, en un contexto de cambio social y político desde el Estado, muchas de las organizaciones han quedado descolocadas en su tradición confrontativa y con nuevas dificultades en el relacionamiento político con el poder y las instituciones gubernamentales.

Otro de los retos a los que se enfrentan las organizaciones sociales en la ciudad es el de democratizar las prácticas organizativas internas, conseguir organizaciones con base social real que sean la expresión del poder popular y de los intereses de los ciudadanos y ciudadanas que viven en ese territorio. Tienen que ser democráticas, incluyentes y participativas, abiertas a la articulación de las diversas formas de organización que cohabitan en el territorio barrial. Hay que pensar en las reivindicaciones concretas inmediatas, pero también en una propuesta de barrio y de ciudad de mediano y largo plazo. No solamente luchar por resolver la falta de servicios e infraestructura básica, sino también avanzar a una propuesta integral donde se incorporen los temas de seguridad, de economía solidaria, de derecho a la ciudad.

En Quito necesitamos organizaciones que busquen articulación e incidencia, que renueven su dirigencia, que incorporen a los y las jóvenes, a las mujeres, a las personas mayores. Que la participación y la inclusión no sean solamente una declaración de principio, sino una práctica apropiada y permanente, que les permita construir su autoestima como organización de referencia frente al barrio, a la ciudad y al país. Y, fundamentalmente, organizaciones sociales que se conviertan en los auténticos actores protagónicos del proyecto político de transformación que se empuja en el país en este momento. ///

Regularización de barrios prioridad de la política pública

La lucha por la exigencia del derecho a la ciudad ha conseguido resultados en el caso del Distrito Metropolitano de Quito en un tema tan sensible como es la legalización de barrios. Ha sido una política prioritaria en estos dos años de gobierno, y los resultados hablan por sí solos: en el año 2009 el MDMQ tuvo constancia de la existencia de 170 expedientes de regularización de barrios, por lo que se vio necesario crear la Unidad Especial de Regularización de Barrios, que tenía como objetivo apoyar la tramitación de esos expedientes, a la vez que se combatía desde la autoridad pública el tráfico de tierras, la manipulación y el chantaje a las familias que ocurría como consecuencia de las irregularidades en tenencia de tierra, escrituras, etc. Después del primer diagnóstico hecho por la Unidad Especial se comprobó que el problema era mucho más grave: se detectaron más de 470 barrios irregulares.

Si durante la anterior administración municipal se regularizaban 19 barrios al año, la importancia dada a este tema por el alcalde Barrera hace que sean un promedio de 85 barrios los que se legalizan cada año, gracias a las unidades desconcentradas de legalización en las administraciones zonales. Cabe mencionar que, el 75% de problemas se da

en barrios que tenían o no escrituras globales y que no existían documentos de tenencia de tierra, mientras que un 3% es en relación a barrios ubicados en áreas de protección ecológica o de relocalización.

De igual manera, por iniciativa del Alcalde Augusto Barrera se incorporaron Código Orgánico de Organización Territorial Autonomías y Descentralización (COOTAD) artículos que permiten hacer integración parcelaria y expropiación especial. Esta última debido a que los traficantes de tierras, a excusa de seguir explotando, se mantienen como dueños de la tierra y no traspasan la propiedad a los compradores a pesar de que estos ya pagaron sus cuotas respectivas. El COOTAD permite hacer expropiación en base al avalúo de la época en que se hizo la lotización para que no se beneficie a los traficantes de tierras. La última opción es la partición administrativa porque mucha gente tiene propiedad de derechos y acciones o herencias. El COOTAD ahora declara en propiedad horizontal un predio y regulariza de manera más rápida. Un ejemplo de solución, es el caso emblemático de Atucucho, que luego de 30 años de lucha de sus moradores ha sido finalmente resuelto. ///